

FOJA: 27 .- .-

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 1º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-5462-2023
CARATULADO : CALDERÓN/FISCO DE CHILE - CONSEJO DE
DEFENSA DEL ESTADO DE CHILE

Santiago, seis de Noviembre de dos mil veintitrés

VISTOS:

A folio 1 rectificada a folio 6, comparece el abogado Luis Pérez Camousseight, mandatario judicial de **LUIS ALBERTO CALDERON GARCIA**, jubilado, todos domiciliados para estos efectos en calle Doctor Sótero del Río 326, oficina 707, comuna de Santiago, interponiendo demanda de indemnización de perjuicios, en juicio ordinario, en contra del **FISCO DE CHILE**, representado legalmente por Raúl Letelier Wartenberg, presidente del Consejo de Defensa del Estado, con domicilio en Agustinas N° 1225, Piso 4, comuna de Santiago, solicitando se le condene a pagar al demandante la suma de \$200.000.000, o la suma de dinero que se estime en justicia y equidad, más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo, todo ello con costas.

Señala que su representado con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura, Valech 1 N° 4.008, de actuales 78 años de edad, a la fecha de la ocurrencia de los hechos era militante del Partido Comunista de Chile y empleado de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, ubicada en la comuna de Puente Alto.

Añade que fue detenido ilegalmente por militares en la comuna de La Florida, el día 11 de septiembre de 1973, y permaneció privado de libertad hasta el 04 de noviembre de 1974.

Relata que durante todo el periodo que estuvo en prisión fue torturado mediante golpizas brutales e inclusive fue objeto de dos simulacros de fusilamiento. Además, fue traslado a distintos centros de detención, entre ellos, el Regimiento de Puente Alto, Estadio Nacional, al Campo de



Concentración de Chacabuco, al Campo de Prisioneros de Puchuncaví y finalmente al Campo de Prisioneros de Tres Álamos, lugar desde obtuvo su libertad, para salir al exilio el año 1976 con destino a Canadá.

Expresa que de las torturas descritas se desprende inequívocamente que el demandante sufrió un perjuicio tanto psíquico, físico y moral provocado por el Estado de Chile durante el gobierno dictatorial, que debe ser reparado.

Como fundamentos jurídicos de su pretensión invoca los artículos 2, 4, 5, 6, 7 y 38 de la Constitución Política; artículos 4 y 42 la Ley 18.575, que establece la responsabilidad del Estado en diversos artículos; cita doctrina y jurisprudencia al respecto, señalando los tratados internacionales que regulan la materia.

A folio 15, rola el acta de la notificación de la demanda, practicada de conformidad al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil el día 11 de junio de 2023.

A folio 16, compareció el Fisco de Chile, representado por la abogada procuradora fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, Ruth Israel López, contestando la demanda civil de indemnización de perjuicios, solicitando el rechazo de la acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; en subsidio, que se rebaje sustancialmente el monto pretendido.

Como primera defensa opone la excepción de cosa juzgada, al efecto sostiene que el demandante de autos ya demandó al Fisco, por los mismos hechos, en la causa caratulada “Salgado y otros con Fisco de Chile”, del 14º Juzgado Civil de Santiago, Rol C-1890-2006, autos en que por sentencia definitiva se rechazó la demanda por acogerse la excepción de prescripción, misma que fue confirmada por la I. Corte de Apelaciones de Santiago y rechazada la casación en el fondo deducida en su contra, encontrándose firme y ejecutoriada.

Realiza un extenso análisis del derecho en que funda dicha excepción, como también cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y contextualiza dicha institución en el derecho internacional.



En subsidio, opone la excepción de reparación integral, sostiene que resulta improcedente la indemnización alegada por haber sido reparado el demandante, principalmente a través de tres tipos de compensaciones, (a) reparación mediante transferencias directas de dinero, (b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, y (c) reparaciones simbólicas.

Hace hincapié que en la especie, el actor ha percibido beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N°19.992 y sus modificaciones, sobre prisioneros y torturados políticos; estableciéndose una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$ 1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$ 1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad, a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de Prisioneros Políticos y Torturados” de la nómina de personas reconocidas como víctimas. Adicionalmente, el actor recibió Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.

Agrega que a los beneficiarios, tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, les fue concedido el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en servicios de salud del país, agregando que también se les otorgaron beneficios educacionales, consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores, a través de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación; y asimismo, beneficios en vivienda; de lo que resulta concluir que los referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños, no pudiendo ser, entonces, reparados nuevamente; citando jurisprudencia relativa a tal situación.

En subsidio, opone excepción de prescripción extintiva de 4 años con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, puesto que de acuerdo con el relato fáctico de la demandante, la privación de libertad y torturas ocurrió entre el día 24 y 27 de marzo de 1983. En efecto aun cuando se considerase



que la prescripción estuvo suspendida durante el período de la dictadura militar, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el **01 de junio de 2023**, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332.

En subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

Añade que los tratados internacionales que rigen en esta materia, no establecen de manea explícita la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria civil, por lo que no existiendo una norma especial debe recurrirse al derecho común; pues cualquiera sea el origen o naturaleza de la indemnización de perjuicios, su contenido es netamente patrimonial.

Destaca que Chile, al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana, formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, esto es, el 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

En subsidio, alega que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales; por último, alega la improcedencia del cobro de reajustes e intereses.

A **folio 19**, la demandante evacuó el trámite de la réplica, ratificando los fundamentos de hecho y derecho invocados en el libelo indemnizatorio y contravirtiendo todas y cada una de las excepciones alegadas por el Fisco, en base al derecho internacional.



A folio 21, el Fisco evacuó el trámite de la dúplica, reiterando las argumentaciones expuestas en su contestación de la demanda, insistiendo en las excepciones de cosa juzgada, de reparación satisfactiva y de prescripción, en base al derecho internacional.

A folio 26, se omitió el llamado a conciliación y se recibió la causa a prueba.

A folio 35, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: A folio 1 comparece el abogado Luis Pérez Camousseight, mandatario judicial de **LUIS ALBERTO CALDERON GARCIA**, interponiendo demanda de indemnización de perjuicios, en juicio ordinario, en contra del **FISCO DE CHILE**, solicitando se le condene a pagar al demandante la suma de \$200.000.000, o la suma de dinero que se estime en justicia y equidad, más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo, todo ello con costas.

SEGUNDO: Que, notificada legalmente la demanda, fue contestada conforme las alegaciones y defensas reseñadas en la parte expositiva, mismas que las partes replicaron y duplicaron oportunamente.

TERCERO: Con el objeto de acreditar sus dichos, la parte demandante rindió únicamente prueba instrumental, inobjetada de contrario, consistente en:

A folio 29:

1.- Artículo titulado “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental, elaborado por el Programa de Salud Mental de la Vicaría de la Solidaridad e incorporados en los autos rol C-22.561-2018, del 28° Juzgado Civil de Santiago, seguidos por la misma materia.

2.- Artículo titulado “Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico – psiquiátrico” del mes de julio del año 1978, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.



3.- Artículo titulado “Tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980. Su impacto psicológico” del mes de julio del año 1980, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.

4.- Artículo titulado “Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos” del mes de Abril del año 1987, suscrito por las trabajadoras sociales Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards y Ximena Taibo Grossi, del departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad.

5.- Artículo titulado “Salud Mental y violaciones a los Derechos Humanos” del mes de junio del año 1989, suscrito por el Dr. Andrés Donoso, Dr. Guillermo Hernández, Ps. Sergio Lucero, Dr. Ramiro Olivares y Aux. Enf. Janet Ulloa, del equipo de salud de la Vicaría de la Solidaridad.

A folio 30:

6.- Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Valech 1.

7.- Nómina de presos políticos y torturados Comisión Valech 1 en la que figura el demandante Luis Alberto Calderón García con el número 4.008.

8.- Copia de antecedentes de carpeta de Luis Alberto Calderón García del Instituto Nacional de Derechos Humanos presentados ante la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura.

9.- Sentencia de casación dictada por la Excma. Corte Suprema, de fecha 14 de Junio de 2022 dictada en los autos rol de ingreso Excma. Corte Nro. 149.250-20.

10.- Sentencia de reemplazo dictada por la Excma. Corte Suprema, de fecha 14 de Junio de 2022 dictada en los autos rol de ingreso Excma. Corte Nro. 149.250-20.

A folio 31:



11.- Evaluación de daño de Luis Alberto Calderón García, emitido por el PRAIS del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, de fecha 26 de mayo de 2023.

CUARTO: A su turno la parte demandada solicitó a folio 16 las siguientes diligencias probatorias:

1.- Traer a la vista la causa Rol 1890-2006, seguida ante el 14° Juzgado Civil de Santiago.

1.1.- Que por resolución de fecha 29 de junio de 2023, se trajo a la vista la causa Rol 1890-2006, seguida ante el 14° Juzgado Civil de Santiago, diligencia que se cumplió a cabalidad a través de la página web del poder judicial www.pjud.cl, enlace “consulta de causas”, sin necesidad de requerir el expediente material, pues todos los antecedentes necesarios para una acertada resolución de la excepción de cosa juzgada, constan en la carpeta electrónica.

2.- Oficio al Instituto de Previsión Social para informe sobre los montos percibidos por el demandante Luis Alberto Calderón García, cédula de identidad 4.940.731-9.

2.1.- A folio 22 se agregó el informe requerido, el cual señala, en síntesis, que el actor Luis Alberto Calderón García, cédula de identidad 4.940.731-9, en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura (Ley Valech), es beneficiario de: **(a)** Ley 19.992, habiendo recibido la cantidad de \$37.559.984 por concepto de pensiones; **(b)** \$3.000.000, como Aporte Único Ley 19.992; **(c)** \$1.000.000, como Aporte Único Ley 20.874; **(d)** Aguinaldos por la suma de \$609.685; y **(e)** una pensión actual de \$263.264.

QUINTO: Que, son hechos que constan en la causa por no haber sido objeto de controversia por las partes, más aún se encuentran acreditados con el mérito de los documentos reseñados en los motivos anteriores, los siguientes:

1.- Que el actor Luis Alberto Calderón García, cédula de identidad 4.940.731-9, está reconocido en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura (Ley



Valech) individualizado bajo el N° 4008 en la Nómina de Prisioneros Políticos y Torturados.

2.- Que consta del certificado de fecha 06 de noviembre de 1974, emitido por Jorge Espinoza Ulloa, Coronel, Secretario Ejecutivo Especial del Ministerio de Defensa Nacional, que Luis Alberto Calderón García, cédula de identidad 4.940.731, permaneció detenido en el Campamento de Detenidos Estadio Nacional, Chacabuco y Puchuncaví, entre el 11 de septiembre de 1973 hasta el 04 de noviembre de 1974, consignándose que dicha detención fue temporal y tuvo como consecuencia la aplicación de la Ley de estado de Sitio; y que fue puesto en libertad por no haberse comprobado que hubiese contravenido las normas Constitucionales del país; posteriormente el año 1976 salió al exilio.

3.- Consta en el pasaporte de Luis Alberto Calderón García, cédula de identidad 4.940.731-9, que en el año 2004 tenía domicilio en Winnipeg, Canadá.

4.- Que en la calidad de víctima de represión política, ha recibido por aplicación de las Leyes 19.992 y 20.874, la cantidad de \$42.169.669 por concepto de pensiones, aporte único y aguinaldos. Asimismo, percibe una pensión mensual que el 10 de julio de 2023, ascendía a \$263.264.

5.- Que en la causa Rol 1890-2006, seguida ante el 14° Juzgado Civil de Santiago, consta que: **(a)** a folio 91, se dictó sentencia definitiva de primera instancia, con fecha 05 de julio de 2011, a través de la cual se acogió la excepción de prescripción deducida por el Fisco de Chile, rechazándose la demanda de indemnización de perjuicios, deducida entre otros, por Luis Alberto Calderón García, fundada en los mismos hechos en que se basa la demanda del caso de autos; **(b)** a folio 111, con fecha 19 de diciembre de 2014, la Excma. Corte Suprema, dictó sentencia en el Ingreso Civil N° 7649-2011, a través de la cual rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que a su vez confirmó la de primera instancia que acogió la excepción de prescripción; y **(c)** a folio 112, por resolución de fecha 19 de diciembre de 2014, se dictó en primera instancia el cúmplase definitivo a los recursos



interpuestos en contra de la sentencia definitiva, quedando ésta firme y/o ejecutoriada.

SEXTO: Que como primera cuestión, toca referirse a la excepción de cosa juzgada opuesta por el Fisco de Chile.

Al respecto, ha quedado establecido en el motivo precedente, que en los autos sustanciados ante el 14° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol 1890-2006, por sentencia definitiva fecha 05 de julio de 2011, la que se encuentra firme y/o ejecutoriada, se acogió la excepción de prescripción deducida por el Fisco de Chile, rechazándose la demanda de indemnización de perjuicios, deducida entre otros, por Luis Alberto Calderón García, fundada en los mismos hechos que se sometieron al conocimiento y resolución de este tribunal.

En esta materia, la Corte Suprema ha sostenido en reciente fallo, dictado en el Ingreso Corte N°862-2022, que la institución de la cosa juzgada consagrada en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, norma interna de carácter meramente legal, debe ceder ante el derecho a una reparación integral derivado de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que por disposición del inciso 2° del artículo 5° de nuestra Carta Fundamental tienen una jerarquía superior; y en definitiva ha rechazado dicha alegación.

Que si bien es cierto es deber de todos los órganos del Estado de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Constitución Política de la República, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, como se lo establece el Artículo 1° de la Convención Americana de Derechos Humanos; no es menos cierto que, existiendo los remedios en el derecho interno no puede desconocerse su validez y eficacia sin que ello necesariamente implique una colisión con las normas del Ius Cogens de los derechos humanos, todo lo contrario, contribuyen de manera complementaria y armónica en la solución del conflicto.

En tal sentido, tanto la doctrina nacional como la extranjera ha elaborado una distinción entorno a la institución de la cosa juzgada, que dice relación precisamente con sus efectos, diferenciándose así una cosa juzgada material



de otra netamente formal, dejando en la última a salvo la posibilidad de revisar lo ya decidido en un proceso posterior.

Sobre el particular, nuestro Excmo. Tribunal, en la causa en el Rol 44.260-2017, citado al profesor Ezurmendia, señaló *“Y, en estas condiciones, el análisis desemboca en la conocida distinción entre cosa juzgada material y cosa juzgada formal. Cuando ahora el actor acude a la justicia ordinaria aduciendo la legislación común que rige el contrato celebrado, despojado de los textos protectores de consumidor que había blandido allá, formalmente hay una decisión, que ha sido de rechazo de la acción, pero material o substancialmente el conflicto no ha sido decidido y, por tanto, no hay cosa juzgada en su sentido material”*. (pág. 137).

Siguiendo esta línea considerativa, se observa que si bien en la causa seguida ante el 14° Juzgado Civil, el juez de la época desechó la demanda, tal decisión no se pronunció sobre el fondo del asunto sometido a su decisión; y en tal sentido, una excepción formal no deja de serlo aunque se plantee como defensa sustantiva, resultando evidente que lo que se realizó en el proceso primitivo fue una apreciación de carácter adjetivo sobre la oportunidad de la acción; pero no en términos sustantivos sobre el fondo del asunto, es decir, no se dio una respuesta a la demanda de protección de los derechos sustantivos incoada por las víctimas.

Sin perjuicio de lo anterior, y aun en el caso de considerarse que no es posible establecer una distinción entre cosa juzgada formal y/o material, por no contemplarlo expresamente el legislador interno. Lo cierto es que a juicio de esta sentenciadora, tampoco se cumple en la especie con la triple identidad requerida, dado que no basta una mera comparación entre lo pedido pretéritamente y lo demandado en el caso de autos, sino que se debe realizar un examen de fondo, sobre la base de lo juzgado, es decir, sobre el objeto del proceso.

Al efecto, según prescribe el artículo 177, número 2° del Código de Procedimiento Civil, el objeto es la “cosa pedida”, entendida como el *beneficio jurídico inmediato que se reclama, o al que se pretende tener*



derecho, o la utilidad o ventaja que se busca declarar en favor de la parte. Por lo tanto, el examen que debe realizarse respecto de una posible identidad entre dos procesos, se extiende más allá del análisis de los bienes jurídicos cuya protección se solicitó, sino que necesariamente debe extenderse a la resolución adoptada en términos cualitativos y cuantitativos en la sentencia primigenia.

Ahora bien, como en la sentencia dictada en el 14° Juzgado Civil no hubo un pronunciamiento de fondo relativo a esclarecer la responsabilidad del Estado en las violaciones a los derechos humanos reclamadas por los demandantes ni su pretensión reparatoria, a juicio de esta magistratura, no se satisface uno de los presupuestos de admisibilidad de la defensa planteada, a saber, “la identidad de cosa pedida” en los términos señalados precedentemente, circunstancia que obsta a que se configure la triple identidad requerida para que opere la excepción en estudio.

SEPTIMO: Que zanjado lo anterior, resulta necesario y oportuno dejar consignado que el 11 de Noviembre de 2003, transcurridos 13 años desde que se restableció el Estado de Derecho en nuestro país, durante el gobierno del Ex Presidente, S.E Ricardo Lagos Escobar, se dictó el Decreto N° 1040, mediante el cual se creó la “Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el Esclarecimiento de la Verdad acerca de las Violaciones de Derechos Humanos en Chile”, cuyo objetivo, de acuerdo a las palabras del propio gestor, fue determinar el universo de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, entre Septiembre de 1973 y Marzo de 1990; que se materializó en un Informe que consta de más de 500 páginas, elaborado con 28.000 testimonios considerados válidos (se recibió testimonio de 35.865 personas, residentes en Chile como en el extranjero); de los que, con la debida prudencia y cautela, se dejó constancia en el mismo informe, sin individualizar nombres ni algún otro dato personal, sino únicamente el sexo del declarante, y el lugar en que fue detenido.

Conjuntamente con el informe, la Comisión elaboró un listado con los nombres de las personas a quienes se les reconoció la calidad de Presos Políticos y Torturados, con un total de **27.153** personas.



OCTAVO: Que, posteriormente, y con ocasión del resultado de la labor de la Comisión, fue dictada la Ley N° 19.992, publicada con fecha 24 de Diciembre de 2004, que “Establece Pensión de Reparación y Otorga otros Beneficios a Favor de las Personas que indica”, cuyo artículo primero, contenido en el Título I “De la pensión de reparación y bono”, dispone: *“Establécese una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo “Listado de Prisioneros Políticos y Torturados”, de la Nómina de personas reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior.”*

El artículo segundo, establece que la pensión anual aludida, ascendería a \$1.353.798.- para aquellos beneficiarios menores de 70 años de edad; a \$1.480.284.- para aquellos beneficiarios mayores de 70 o más años pero menores de 75 años; y a \$ 1.549.422.- para aquellos beneficiarios de 75 o más años de edad; pensión que se pagaría en 12 cuotas mensuales de igual monto, reajutable conforme lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N° 2.448, de 1979, o en las normas legales que reemplacen dicha disposición.

Su inciso segundo, establece que la pensión referida, sería incompatible con aquellas otorgadas en las leyes números 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quiénes se encuentren en tal situación optar por uno de estos beneficios en la forma que determine el Reglamento; precisando que las personas que ejercieran dicha opción, tendrían derecho a un bono de \$ 3.000.000.-, el que se pagaría por una sola vez dentro del mes subsiguiente de ejercida la opción.

El artículo séptimo, dispone que tanto la pensión como el bono se devengarán a partir del primer día del mes subsiguiente a la fecha en que los beneficiarios presenten sus solicitudes, mismas que podrían impetrarse desde la publicación de la misma ley.

NOVENO: Que, por otro lado, mediante la Ley N° 20.874, publicada con fecha 29 de Octubre de 2015, que “Otorga un aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el



Estado de Chile”, de acuerdo a su artículo primero, se otorgó un aporte único en carácter de reparación parcial, de \$1.000.000.-, a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y a los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y N° 20.405, respectivamente.

El inciso tercero, dispone que: *“Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.”*

DECIMO: Que, en cuanto al demandante Luis Alberto Calderón García, cédula de identidad 4.940.731-9, detenta la calidad de “Prisionero Político y Torturado”, constando en autos que ha percibido, en tal calidad, las sumas señaladas en el **considerando quinto, ordinal cuarto** de este fallo, lo que lleva a establecer que el actor ha sido y es beneficiario de la Leyes 19.992 y 20.874.

UNDECIMO: Asentado lo anterior, toca referirse a las demás defensas subsidiarias planteadas por el Fisco, la primera de ellas es la excepción de reparación integral o satisfactiva, fundada, como ya se explicitara, en que el actor ha sido indemnizado, en razón de haber recibido beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N° 19.992 y 20.874; resultando en consecuencia improcedente ser indemnizados por daños cuya génesis radica en los mismos hechos.

Al respecto, es necesario señalar que tal como lo sostuvo la jurisprudencia la Comisión Valech no pretendió, en estricto rigor, efectuar una “transacción” con cada uno de los beneficiados, para así precaver la interposición de una acción como la del caso de autos; cuestión que no aparece del tenor literal de la ley, ni tampoco de su espíritu, toda vez que en ella se establece que la pensión sería incompatible con aquellas otorgadas en las leyes números 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quienes se encontraren en tal situación



optar por uno de dichos beneficios en la forma que determine el Reglamento; situación de la que resulta entonces concluir que, no obstante ser el actor beneficiario de la pensión otorgada por el Estado, en su condición de “prisionero político torturado”, tal hecho no es óbice para que el afectado interpusiera la acción indemnizatoria del caso de autos.

Por lo demás, la situación que afectó al demandante está dentro de lo que la teoría del derecho de daños estima procedente, en orden a reparar el daño causado y nada más que el daño, centrando la función primordial de la reparación en la víctima. Así, si el Estado es culpable por los atentados a la dignidad humana, la responsabilidad civil se concretiza en la teoría de daños, cuya función esencial es su reparación, efecto que a su vez se radica en el patrimonio del Estado quien tiene el deber de repararlo, entre otras formas, por indemnizaciones pecuniarias.

En tal sentido, está acreditado que el demandante fue sometido a una detención ilegal que se prolongó entre septiembre de 1973 a noviembre de 1974, periodo en el cual estuvo constantemente expuesto a agresiones y apremios ilegítimos, para luego ser liberado. Así las cosas, el daño que reclama se enmarca en el daño moral y la indemnización por ese daño es una manera de abordar la reparación, pues no se pueden borrar los hechos, y se configura la obligación de otorgar una indemnización pecuniaria que compense el daño causado que no ha sido íntegramente reparado, por lo que la excepción de pago y/o reparación integral opuesta por el Fisco no podrá prosperar.

DUODECIMO: Que, el Fisco también opuso la excepción de prescripción de la acción indemnizatoria, fundada en los argumentos explicitados con anterioridad en el presente fallo.

Al respecto sólo caber tener especialmente presente que del tenor literal del Artículo 5° de nuestra Carta Fundamental, fluye que el ejercicio de la soberanía se realiza por el pueblo a través del plebiscito y también, se realiza por las autoridades que la misma Constitución establece; y que dicho ejercicio, reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de



la naturaleza humana; y es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Por consiguiente, a través de dicha disposición constitucional, se incorporan al derecho nacional las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales, entre las que destaca el deber de indemnizar o reparar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos; adquiriendo rango constitucional.

Al efecto la Excma. Corte Suprema, en los autos Rol **22.856-2015**, de fecha 29 de Diciembre de 2015, ha señalado que, *“tratándose de un delito de lesa humanidad -lo que ha sido declarado en la especie-, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que instauro el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que, en virtud de la ley N° 19.123, reconoció en forma explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de aquellos calificados como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, regalías de carácter económico o pecuniario. En esta línea discurren también SCS Nros. 20.288-14, de 13 de abril de 2105; 1.424, de 1 de abril de 2014; 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras.*

Por ende, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual resulta discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad indispensables en un Estado de derecho democrático. Entonces, pretender el empleo de las disposiciones del Código Civil en la responsabilidad derivada



de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el régimen jurídico, hoy resulta improcedente.

Por lo demás, la reparación integral del menoscabo no se discute en el plano internacional, ni se circunscribe a los autores de los crímenes exclusivamente, sino también se prolonga hacia el mismo Estado. La preceptiva internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, desde que, sin duda, siempre ha existido, con evolución de las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho violentado.”

En conclusión, según lo expresado precedentemente, las excepciones de prescripción principal y subsidiaria serán desestimadas, por encontrar ambas su fundamento en normas de derecho interno, preceptos que, como ha quedado claramente explicitado en el presente fallo, no son aplicables al caso de autos.

El argumento anterior, además ha sido reiterado recientemente en un fallo de fecha **6 de junio pasado**, que señala en su considerando “...**Octavo:** *Que, en suma, pesando sobre el Estado la obligación de reparar a las víctimas y sus familiares consagrado por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, el derecho interno no deviene en un argumento sostenible para eximirlo de su cumplimiento. No sólo por lo ya expresado sino porque este deber del Estado también encuentra su consagración en el derecho interno. En efecto, el sistema de responsabilidad del Estado deriva además del artículo 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que dispone que la Administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su finalidad es promover el bien común, y que uno de los principios a que debe sujetar su acción es el de responsabilidad; y, consecuentemente con ello, en su artículo 4° dispone que “el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere*



ocasionado”. “Así, no cabe sino concluir que el daño moral causado por la conducta ilícita de los funcionarios o agentes del Estado autores de los ilícitos de lesa humanidad en que se funda la presente acción, debe ser indemnizado por el Estado”. C.S Rol N° 130.949-2020.

DECIMO TERCERO: Que, habiéndose desestimado las excepciones de reparación integral y de prescripción de la acción civil, toca pronunciarse sobre la procedencia de la indemnización pretendida.

Como se ha venido expresando, se encuentra acreditado que el actor Luis Alberto Calderón García, detenta la calidad de “Prisionero Político y Torturado”, por lo que es del todo plausible sostener que la detención, tortura, vejámenes que padeció, y posterior exilio, se debieron al hecho de sus convicciones políticas por ser militante del partido comunista, como se señala en la demanda.

Siendo dichas circunstancias las que motivaron su detención y posterior tortura, física y psicológica, es pertinente señalar que los actos ejercidos por agentes del estado en su persona, debieron necesariamente afectar su estado físico y emocional, de manera inmediata y durante todo el período que estuvo detenido, como también en los tiempos futuros.

Asimismo, con el mérito de los informes psicológicos generales y particular acompañados a folio 29 y 31, es posible establecer una presunción grave, precisa y concordante en cuanto a que una persona que ha sido violentada física y psicológicamente por gentes del Estado, como en el caso de autos, sufrió perjuicios, daño emocional y secuelas que deben ser reparadas, por cuanto es deber del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana como son la integridad física y psíquica, no siendo tolerable bajo ningún respecto que sus agentes hayan lesionado los derechos fundamentales del demandante, por lo que el Estado debe responder.

DECIMO CUARTO: Así las cosas, el daño experimentado por el actor sólo se puede enmarcar dentro de aquél denominado “moral”, por lo que resulta plausible entonces acoger la demanda, y tal circunstancia conlleva a



determinar los perjuicios que las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos sufrieron en el régimen militar.

Ello es una cuestión de ponderación y valoración que se le impone al tribunal, con el objeto de establecer y precisar los daños, la aflicción y el dolor, mismos que no solo son posibles de presumir fundadamente, sino también por el principio de normalidad, que indica que cualquier persona que es o ha sido objeto de apremios ilegítimos y torturas por agentes del Estado sufre un daño que debe ser reparado.

En esta labor de determinación del quantum indemnizatorio, esta sentenciadora considera como aspectos relevantes las siguientes circunstancias: **(a)** la edad en la fue detenido, cuando era un hombre joven; **(b)** el periodo de privación de libertad, un año y dos meses, entre septiembre de 1973 y noviembre de 1974; y **(c)** los vejámenes a los que fue sometido, a vía de contextualización, golpizas brutales, aplicación de corriente y quemaduras en su cuerpo, simulacro de fusilamiento y posterior exilio.

DECIMO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior y de que, además, se viene desestimando la excepción de reparación integral y/o satisfactoria, esta sentenciadora es del parecer de considerar en la indemnización final, los montos percibidos por el actor al amparo de las Leyes 19.982 y 20.874, que ascienden a \$42.169.669 por concepto de pensiones, aporte único y aguinaldos, teniendo para ello la naturaleza de las pensiones otorgadas por el Estado en este tipo de materias.

En efecto, el hecho dañoso que motivó la dictación de las leyes de reparación, a saber ley 19.992 y ley 20.874, entre otras, fue el hecho ilícito del actuar de los agentes del Estado hacia víctimas que sufrieron persecución política, según quedó así recogido en el Informe Valech. Enseguida, debe tenerse especial atención que el hecho ilícito es la causa adecuada del beneficio y del daño, es decir, que tanto el beneficio como el daño provienen del mismo hecho ilícito.

En este aspecto, las leyes de reparación fueron una reacción positiva del Estado tendientes a lograr intentar reparar el daño causado, lo que en ningún



caso inhibe o coarta el derecho a que las personas que se sienten perjudicadas o insatisfechas accionen y soliciten la reparación integral de su daño.

A mayor abundamiento, tanto las leyes de reparación como las indemnizaciones otorgadas por los tribunales cumplen una función reparadora de daños, que emana de la misma naturaleza, cual es el daño moral, siendo ambas compatibles y complementarias.

Así las cosas, la regla de la *Compensatio lucri cum damno* es un principio de imputación de daños, dentro de la teoría del derecho de daños y la reparación integral, por lo que emanando el mismo daño del actuar ilícito de los agentes del Estado, teniendo además la misma naturaleza cual es la reparación del daño moral, por ser víctimas de la Responsabilidad del Estado, el monto ya referido y otorgado estos años debe ser considerado en la suma final a recibir por parte de las víctimas, tal como en el mismo sentido lo resolvió la Sentencia ingreso Corte 1763-2020, de esta Corte de Apelaciones.

DÉCIMO SEXTO: Que considerar el monto que han recibido no significa descartar que todo daño debe ser íntegramente reparado. Citando al profesor Llamas Pombo *“difícil es ponderar la correcta valoración del sufrimiento, la pena, angustia, las vivencias desagradables e incluso el trauma psíquico, más aún traducir a una categoría diferente la de la reparación económica de los daños morales y ello queda en definitiva a la prudencia de los tribunales, dentro de los límites de las pretensiones resarcitivas producidas en la causa”* (Eugenio Llamas Pombo. “Las formas de prevenir y reparar el daño”. Wolters Kluwer, España 2020, pág.203.)

Por su parte, en la doctrina nacional, la profesora Domínguez Hidalgo refiere que la forma predilecta y más eficiente de tutela personal es la acción indemnizatoria. En la especie, la *acción de responsabilidad civil alcanza esa eficiencia porque es la única acción civil que se funda precisamente solo en la condición de persona. Siguiendo a López Jacoste, la responsabilidad civil se ha constituido en una garantía genérica de plenitud personal* (Carmen Domínguez Hidalgo. “El Principio de reparación integral en sus contornos actuales”, Thomson Reuters, año 2019, pág. 87)



En consecuencia, es perfectamente posible la compatibilidad entre los beneficios pecuniarios otorgados por las leyes de reparación con las indemnizaciones que otorga el poder judicial, y no se inhibe conceder un monto por el daño extrapatrimonial por todo aquello que se estime que no ha sido reparado. Se cumple así el principio de reparación integral del daño, cuyo reconocimiento en la doctrina es aceptada como la función primordial del derecho de daños y que permite además, dar fuerza a los argumentos propios de la responsabilidad civil.

Conviene destacar que la Ley 19.992 en su mensaje destaca que *“la prisión política y las torturas constituyeron una práctica institucional del Estado que es absolutamente inaceptable y ajena a la tradición histórica de Chile”*. Eso hizo necesario la dictación de la ley en reconocimiento a aquellas víctimas y debe el Estado *“entregar una compensación que, aunque sea austera, es una forma de reconocer su responsabilidad en lo ocurrido”*.

DÉCIMO SEPTIMO: Que en consecuencia, siendo del todo procedente acceder a la demanda el monto será ponderado teniendo especialmente presente la situación vivida por el actor, quien siendo un hombre un joven fue detenido y sometido a prisión política casi por un año y dos meses, periodo en el cual estuvo constantemente expuesto a todo tipo de torturas y vejámenes, para posteriormente partir al exilio el año 1976, lo que interrumpió su proyecto de vida en nuestro país siendo desarraigado de su familia, aspectos todos del daño moral que esta jueza pondera en la suma de \$50.000.000(cincuenta millones de pesos).

Por lo anteriormente expuesto se condenará al Fisco de Chile, a pagar a Luis Alberto Calderón García, la suma única y total de **\$50.000.000.-, (cincuenta millones de pesos)**, suma que se estima justa y equitativa, considerando que el actor es beneficiario de las leyes de reparación respectivas ya indicadas. El monto indemnizatorio fijado, deberá pagarse debidamente reajustado desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada; más los intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero no reajustables desde que el Fisco incurra en mora.



Por estas consideraciones, y visto además, lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 254, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; el Decreto 1040, de 26 de Septiembre de 2003, la Ley 19.992 y la Ley 20.874;

SE DECLARA:

- 1.- Que **se rechazan** las excepciones opuestas por el Fisco demandado.
- 2.- Que, **se acoge** la demanda intentada a folio 1, y se condena al Fisco de Chile a pagar a Luis Alberto Calderón García, la suma única y total de \$50.000.000, en la forma señalada en el considerando **décimo séptimo**.
- 3.- Que, no se condena en costas al demandado.

Rol C-5462-2023.-

Regístrese, notifíquese y elévese en consulta si no se apelare.

Dictada por Isabel Margarita Zúñiga Alvayay, Jueza Titular del Primer Juzgado Civil de Santiago.- (Fgm).-

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, seis de Noviembre de dos mil veintitrés**



